

Crónica del mes

Enero-febrero

Después de la ofensiva guerrillera de noviembre y el relativo repliegue del FMLN que siguió, la Fuerza Armada empezó a propagandizar la idea de que el FMLN había quemado sus últimos cartuchos durante la ofensiva. La tregua unilateral decretada por la comandancia general guerrillera para la navidad y el año nuevo fue recibida por el ejército como una muestra de debilidad. El 15 de enero, el coronel Mauricio Ernesto Vargas, comandante de la Tercera Brigada de Infantería, afirmó que el FMLN se encontraba en estado de "postración," y que pasaría por lo menos un año antes de que entrara a su "convalecencia." El vicepresidente de la república, Francisco Merino, aseguró que el FMLN ya no contaba con la infraestructura logística para lanzar una nueva ofensiva de envergadura.

No obstante estas apreciaciones, la guerra empezó a recobrar paulatinamente la intensidad que la caracterizó en los meses previos a la ofensiva. De acuerdo a los informes enviados por el COPREFA a la prensa nacional, durante el mes de enero hubo 59 combates de encuentro y 19 acciones ofensivas insurgentes, distribuidos así: en Chalatenango ocurrieron 12 combates y 5 ataques; en La Libertad, 3 combates y 4 ataques; en San Salvador, 4 combates y 8 ataques; en Cuscatlán, 6 combates; en Cabañas, 4 combates y 1 ataque. En la zona oriental, que comprende los departamentos de San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután, ocurrieron 17 combates y 2 acciones ofensivas. En

La Paz hubo 2 combates, y 5 en San Vicente. En la zona occidental, en la comprensión de Santa Ana, hubo 4 combates. En todas estas acciones murieron 191 guerrilleros y resultaron heridos 89; por su parte, la Fuerza Armada habría sufrido 32 muertos y 28 heridos.

De acuerdo a radio Venceremos, la guerra marchaba a un ritmo todavía más acelerado de lo que aceptaba el COPREFA. En su parte de guerra de enero, el FMLN aseguró haber causado 532 bajas al ejército, entre muertos y heridos, incluyendo a 10 oficiales. Asimismo, informó que había realizado 17 emboscadas en todo el país, destruido 12 camiones militares y una avioneta, y averiado otras 14 aeronaves, entre ellas 10 helicópteros de la Fuerza Aérea (FAS).

La actividad guerrillera de enero incluyó también algunas acciones de terrorismo, realizadas presuntamente por los comandos urbanos. La primera de ellas fue el atentado realizado la noche del día 15 contra el Ing. José Hernández, ex precandidato de ARENA para alcalde de San Salvador y miembro del sector profesional de dicho partido, quien mantenía fuertes vínculos ideológicos y de amistad con el Lic. Edgar Chacón y el Ing. Gabriel Payés, asesinados el año pasado también por presuntos comandos urbanos. (No obstante, según información publicada por el *Diario Latino*, Hernández, al igual que Payés, era fuerte crítico de la "argolla de ARENA," la cual impuso la candidatura para alcalde de Rafael

Montalvo en las elecciones municipales de 1988, aunque, a la postre, Montalvo fue sustituido por el Dr. Armando Calderón Sol).

El 24 de enero, sujetos desconocidos ametrallaron la residencia del coronel Carlos Humberto Figueroa, Viceministro del Interior, en la colonia Centroamérica. El coronel Figueroa atribuyó el atentado al FMLN. No se informó de víctimas. Dos días más tarde, el 26, presuntos comandos urbanos del FMLN ametrallaron la residencia del presidente de ANTEL, Lic. Saúl Suster, ubicada en la colonia Utila, en Santa Tecla. En el atentado perecieron dos agentes de la policía de ANTEL, quienes prestaban seguridad a la residencia; y resultaron heridos de gravedad otros dos empleados de ANTEL. El 9 de febrero, fue atacado a balazos el ex director de la Policía Nacional, coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, quien salió ileso del atentado.

El FMLN llevó a cabo una actividad de sabotaje particularmente intensa. El 16 de enero, el Estado Mayor de la Fuerza Armada dio a conocer un balance de los daños ocasionados por el sabotaje guerrillero desde el inicio de la ofensiva. Según el balance, el FMLN había dañado 272 postes, 204 torres y 11 transformadores del tendido eléctrico; habría destruido 9 oficinas de ANTEL y habría derribado 8 postes del tendido telefónico. También fueron blanco del sabotaje: 81 autobuses, 108 vehículos particulares, 13 centros comerciales, 5 haciendas, 8 puentes y 2 líneas férreas.

El 28 de enero, unos 150 milicianos del FMLN atacaron el puesto de vigilancia del ingenio *Chaparrastique*, en la periferia de San Miguel, donde destruyeron 5 camiones y dañaron parcialmente otros 4. Simultáneamente, otra unidad guerrillera destruyó las oficinas, bodegas y 2 vehículos de una fábrica de jabón, ubicada también en las afueras de San Miguel. La CEL, por su parte, informó que en los últimos días del mes el FMLN destruyó por lo menos 133 postes del tendido eléctrico tan sólo en el departamento de Usulután, y atacó las instalaciones de la subestación eléctrica *Natividad*, ubicada en las afueras de Santa Ana. En su informe mensual de enero, el FMLN registra la destrucción de 226

estructuras del sistema eléctrico, 2 almacenes, una fábrica de jabón y daños parciales a un puente en las inmediaciones de Izalco (Sonsonate).

En febrero, el FMLN profundizó sus acciones de sabotaje en dos líneas principales: la infraestructura eléctrica y los locales comerciales en San Salvador. Esta segunda línea de sabotaje alcanzó tales niveles que, el 3 de febrero, la Fuerza Armada anunció un plan de contingencia encaminado a contrarrestar la campaña dinamitera del FMLN contra los locales comerciales en San Salvador y en las zonas periféricas. En el plan participarían efectivos del ejército, de la Policía Nacional y de la Policía de Hacienda.

A partir del 9 de febrero, el FMLN inició una serie de ataques contra posiciones militares de Cacaopera (Morazán), Ozatlán, Santiago de María, Santa Elena, Jucuapa y Berlín (Usulután) y Cerro El Tigre (San Vicente). Por su lado, fuentes militares informaron de diversos combates de encuentro de mediano alcance en varios puntos del oriente del país. En el municipio de Corinto, al noreste de Morazán, se registraron 2 combates de encuentro los días 9 y 12 de febrero. Según el COPREFA, en ellos murieron 17 guerrilleros y 3 soldados. El día 12 se combatió en Joateca, en el mismo departamento, con saldo de 4 guerrilleros muertos y un soldado herido. En Jucuapa (Usulután) hubo 2 combates y un ataque del FMLN, en los cuales resultaron heridos 3 soldados y 2 guerrilleros. En otro combate, en Santa Elena, murió un guerrillero. En San Miguel, hubo 2 combates de encuentro; en ellos murieron 2 guerrilleros y otros 4 resultaron heridos.

En Chalatenango, entre el 6 y 12 de febrero, se registraron 8 combates, como producto del desplazamiento de ambas fuerzas sobre territorios comunes. En ellos murieron 20 combatientes del FMLN y un soldado; otros 3 soldados resultaron heridos. Uno de los combates se desarrolló el día 11, en las inmediaciones del campamento de refugiados Corral de Piedra, ubicado en el caserío San Jacinto Guancorita, jurisdicción de San José Las Flores. En el curso de los combates, un helicóptero *UH-1H* de la Fuerza Aérea roquetó la repoblación, habitada por un grupo de refugiados que había regresado recientemente de Honduras.

Uno de los roquets mató a 5 civiles e hirió a otros 17, en su mayoría niños.

Según la denuncia de los repobladores, los hechos ocurrieron así: a primeras horas de ese día, hubo recios combates entre tropas del Destacamento Militar Número 1 y unidades del FMLN, en las inmediaciones de la repoblación. El ejército llamó en su auxilio a la Fuerza Aérea. Hacia las 7:30 de la mañana se hicieron presentes 5 helicópteros y 2 aviones A-37. Las 7 aeronaves bombardearon, roquetearon y ametrallaron en los alrededores y dentro del caserío por espacio de unas dos horas. Por lo menos 15 roquets cayeron sobre las casas de la repoblación. Uno de ellos fue el que provocó las víctimas apuntadas. A las 10:30, cuando se retiraron las aeronaves, llegaron otros 2 helicópteros y un avión C-47, los cuales ametrallaron la zona durante media hora. Después del ametrallamiento, unidades de infantería entraron a la repoblación, catearon las casas "y se llevaron los pocos bienes que la gente tenía, tales como leche en polvo, azúcar, radios, lámparas, cobijas y los pocos centavos que encontraron."

El COPREFA, una vez más, presentó una versión muy distinta de los hechos: unidades de las fuerzas especiales del norte "sostuvieron combates con los terroristas" desde las 6:20 hasta las 14:00 tras ser emboscadas por unos "60 terroristas de las FPL" a la altura de la quebrada Corral de Piedra. Las víctimas civiles ocurrieron debido a que el FMLN disparó "unas catapultas dentro del caserío, las cuales hicieron impacto en algunas casas," según lo "confesó" el guerrillero Abel Dubón Chavarría (David) al ser capturado por el ejército. El comandante del Destacamento Militar Número 1, coronel Jorge Alberto Medrano, negó categóricamente que la Fuerza Aérea hubiese bombardeado la repoblación, "aunque sí se tuvo apoyo aéreo como a un kilómetro de dicho lugar." El jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, declaró que los procedimientos operativos de la Fuerza Aérea establecen que sus aeronaves deben abstenerse de actuar en sectores poblados. El comandante de la Fuerza Aérea, general Rafael Villamariona, indicó que ningún piloto de combate tiene autorización para disparar en presencia de civiles "aun cuando los terroristas

se protejan de la persecución del ejército y de la Fuerza Aérea confundiendo entre la población civil." La Secretaría Nacional de Comunicaciones aseguró que la Fuerza Aérea sigue en sus operativos "un instructivo que le prohíbe bombardear poblaciones civiles." El presidente Cristiani expresó el 18 de febrero, antes de partir a Taiwán, que "lo sucedido es producto de lo que es un enfrentamiento y no hubo bombardeo, como se informó anteriormente, insinuando culpabilidad de la Fuerza Armada. Fue un disparo de roquet contra los terroristas del FMLN y lamentablemente salió dañada la población civil."

Aun antes de investigar los hechos, el ejército atribuyó las denuncias a "infundios que algunos sectores han estado utilizando para tratar de acusar a la Fuerza Aérea." Incluso se quiso hacer recaer la culpa última en los propios repobladores, por haber regresado de Honduras a establecerse en lugares conflictivos. En un comunicado emitido el 12 de febrero, la Secretaría Nacional de Comunicaciones expresó la preocupación gubernamental porque "la repoblación de zonas conflictivas por parte de los refugiados ponga en peligro su integridad física durante los ataques de los terroristas y la defensa que realizan las Fuerzas Armadas del país, en cumplimiento de la Constitución. Por esta razón, el gobierno ofreció reubicarlos en zonas menos expuestas a la violencia terrorista y adquirió para ellos tierras entre las mejores del país, pero dirigentes de los refugiados no las aceptaron."

En el lugar de los hechos, a la vista de la hilera de casas roqueteadas, ante los familiares sobrevivientes y otros testigos presenciales, la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos todavía intentó defender la posibilidad de que los repobladores hubiesen muerto debido a las catapultas del FMLN. Luego de sus primeras investigaciones, concluyó que "dos aviones de la Fuerza Aérea intervinieron con posterioridad a los estallidos que provocaron las mencionadas muertes y lesiones." Sin embargo, las evidencias se impusieron finalmente. Luego de que la Comisión Investigadora exhumó los cadáveres y dictaminó que, efectivamente, los repobladores habían sido víctimas de los roquets de la Fuerza

Aérea, la Fuerza Armada aceptó indemnizar a los familiares sobrevivientes, aunque sin admitir ninguna responsabilidad legal por el incidente.

La actividad bélica fue menor en los departamentos de Cabañas, La Libertad, La Paz y San Salvador. En Santa Ana, el FMLN dio muerte a un teniente y un soldado al emboscar un camión militar en las cercanías de Villa El Congo. En Metapán, hirió a 3 policías nacionales, en otra emboscada, mientras que un soldado y un guerrillero murieron durante un combate efectuado en el cerro "Los Apoyos," en el mismo departamento. En San José de Guayabal (Cuscatlán) hubo 2 combates, durante los cuales murieron 6 guerrilleros y resultaron heridos 5 más.

El ritmo de la guerra se intensificó ligeramente durante la segunda quincena de febrero. De acuerdo al COPREFA, tan sólo en la tercera semana del mes se registraron 14 combates de encuentro, 2 emboscadas y 2 ataques del FMLN a patrullas y posiciones militares. El teatro principal de tales acciones fue Morazán, donde hubo 6 combates, en los cuales murieron 7 guerrilleros y 2 soldados, y resultaron heridos otros 2 insurgentes y 6 soldados más. En San Miguel se desarrollaron 4 combates, con saldo de 4 muertos y 6 heridos en las filas del FMLN, y un herido en las de la Fuerza Armada. En Cuscatlán, murieron un combatiente de cada bando durante una emboscada del FMLN a una patrulla militar. En Cabañas, un combate y un ataque guerrillero a un puesto de la Guardia Nacional dejaron un soldado y un efectivo de la Guardia muertos, mientras que otro agente resultó herido. En San Vicente, murió un soldado y resultaron heridos otros 5 durante un combate de encuentro. En otro enfrentamiento en el norte de Chalatenango, murió un combatiente del FMLN. En San Salvador, el 20 de febrero, 2 policías nacionales resultaron heridos por el estallido de un artefacto explosivo lanzado por guerrilleros contra un vehículo de ese cuerpo de seguridad.

El sabotaje contra la infraestructura eléctrica siguió causando estragos, al igual que la campaña dinamitera contra los establecimientos comerciales. El departamento más afectado fue San Salvador. En la medianoche del sábado 17, el

FMLN atacó las posiciones militares que resguardaban la subestación eléctrica de la CEL en San Antonio Abad, causándole daños parciales. La acción se produjo un día después de que la Fuerza Aérea bombardeara presuntas posiciones guerrilleras en las faldas del volcán de San Salvador, en la misma área de la subestación. En Santa Ana, el FMLN atacó la subestación de Natividad y las antenas parabólicas ubicadas en el cerro Santa Lucía. Días después, unidades del FMLN incursionaron en Quelepa (San Miguel), donde sabotearon una planta beneficiadora de café y una procesadora de fibra de maguey, provocando daños estimados en 1.5 millones de colones.

El 22 de febrero, el FMLN emprendió su campaña denominada "Todo el pueblo a luchar contra la política de hambre del gobierno de ARENA," la cual comprendió varios ataques a posiciones militares en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cabañas. En San Salvador, el FMLN atacó simultáneamente 5 puestos militares, con saldo de 1 soldado muerto y otros 16 heridos. Además, emboscó a 2 patrullas, matando a un Policía Nacional, e hiriendo a un teniente y 3 soldados. El 23, en Cabañas, unidades guerrilleras atacaron 4 puestos militares. Otras unidades rebeldes hicieron dos emboscadas en Coatepeque (Santa Ana), donde resultaron heridos 2 soldados; y en San Vicente, donde murieron 1 subteniente, 5 soldados y 3 guerrilleros, y resultaron heridos 3 insurgentes más.

La actividad bélica amainó sensiblemente con ocasión de la tregua unilateral decretada por el FMLN los días 24 y 25 de febrero, como un gesto de buena voluntad para facilitar el desplazamiento de las delegaciones que concurrirían a las exequias del ex presidente Duarte. Una vez más, la Fuerza Armada menospreció la iniciativa del FMLN. El director de la Policía de Hacienda, coronel Ciro López Roque, afirmó que la medida era "pura propaganda." Posteriormente, el COPREFA acusó al FMLN de haber irrespetado la tregua, y de haberla utilizado como un medio para ganar imagen a nivel nacional e internacional.

En conjunto, durante el mes de febrero, el saldo de la actividad bélica, según los informes del COPREFA, fue el siguiente: 83 muertos y 46

heridos en las filas del FMLN, y 25 muertos y 47 heridos en las del ejército. Asimismo, la Fuerza Armada habría decomisado 120 fusiles, 5 ametralladoras, 19 subametralladoras, 5 piezas de artillería, 2 lanzacohetes, 1 misil antiaéreo, 15 mil cartuchos y abundante material para fabricar explosivos. El FMLN, por su lado, afirmó haber causado 331 bajas al ejército durante el mes, mientras que, en el rubro del sabotaje, destruyó parcialmente un beneficio de café y otro de henequén; dinamitó 12 locales comerciales capitalinos; derribó 203 estructuras del sistema eléctrico y causó daños a una subestación de energía.

Uno de los síntomas más graves del clima de polarización que se generó en el país a raíz de la ofensiva guerrillera de noviembre fue la crispación de los ánimos contra el proceso de diálogo entre el gobierno y el FMLN. Sin embargo, paradójicamente, al mostrar la inviabilidad de una salida militar al conflicto, la ofensiva del FMLN inspiró, por otra parte, nuevas gestiones a favor de una solución política de la guerra.

Pese al golpe político que le infligió la cumbre de Coronado (Ver crónica de diciembre), el FMLN no tardó mucho en diseñar una estrategia para revertir la situación. A través de un comunicado difundido el 11 de enero en San Salvador, la comandancia general guerrillera propuso al gobierno salvadoreño concertar una reunión dentro de los próximos 30 días, con la mediación del secretario general de la ONU, para discutir la reanudación del proceso de diálogo. El mismo día, Alvaro de Soto, asistente del secretario general de la ONU, recibió, en New York, a una delegación del FMLN, presidida por Salvador Samayoa. Al día siguiente, el propio Pérez de Cuéllar respondió afirmativamente a la solicitud de mediación que le formuló la insurgencia.

El Departamento de Estado norteamericano saludó con optimismo el anuncio del FMLN y la aceptación de Pérez de Cuéllar. El 12 de enero, el vocero Richard Boucher calificó de "noticia positiva" la iniciativa insurgente, y expresó que "la única solución permanente a la violencia en El Salvador pasa por la negociación." Boucher tam-

bién manifestó el apoyo del gobierno norteamericano a la mediación de Pérez de Cuéllar.

Los debates en el Congreso norteamericano sobre la continuación de la asistencia militar al gobierno salvadoreño repercutieron también favorablemente en la atmósfera del diálogo. El 9 de enero, el senador Christopher Dodd subrayó, en San Salvador, la necesidad de reanudar cuanto antes el proceso de diálogo entre el gobierno de Cristiani y el FMLN "porque aquí nadie va a ganar la guerra". El 24 de enero, el subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos, Bernard Aronson, afirmó ante la Cámara de Representantes: "ha llegado el momento de poner fin a la matanza en El Salvador. Ha llegado el momento de ponerle fin a la guerra... Muchos tratarán de explotar la memoria y el nombre del padre Ellacuría, pero el único tributo adecuado es un compromiso renovado de parte de la comunidad internacional para movilizar todos los recursos y presiones que se puedan aplicar para negociar el fin del conflicto en El Salvador y garantizar un espacio político seguro en el proceso democrático para todos."

Las nuevas gestiones de diálogo recibieron el espaldarazo del Papa, quien, el 12 de enero, recibió a Monseñor Rivera en audiencia privada. "Juan Pablo II nos ha animado a continuar nuestro esfuerzo de mediación," comentó luego el arzobispo, en una concelebración por la paz en El Salvador con el Cardenal Achille Silvestrini, en la iglesia de Santa María Transtevere.

El FMLN, por su parte, envió a la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) un mensaje en el cual manifestaba que, tras su ofensiva militar de noviembre, se habían abierto "más posibilidades que nunca de alcanzar una solución negociada al conflicto de El Salvador." Según el FMLN, "nuestra ofensiva cambió profundamente el cuadro de la guerra y destruyó el argumento de la supuesta debilidad del FMLN." A la vez, el Frente responsabilizaba al gobierno salvadoreño de no haber llegado a ningún acuerdo en las reuniones de diálogo tenidas en México y San José, porque "nunca han planteado, a lo largo de diez años de guerra, ninguna propuesta para un arreglo político, sino sólo fórmulas para nuestra imposible ren-

dición." Y añadía: "si la negociación hubiera avanzado, nosotros no habríamos lanzado la ofensiva." Aunque no se conoció una respuesta oficial de los obispos a la misiva, el jueves 18 de enero, la CEDES formuló un "vehemente" llamado pastoral en favor de la paz y rechazó la violencia porque "no se justifica por ningún motivo."

El día anterior, el gobierno salvadoreño había emitido un comunicado en el cual se manifestaba dispuesto a reanudar el diálogo, e informaba que el presidente Cristiani se reuniría el 31 de enero con el secretario general de la ONU para solicitar formalmente su mediación en el proceso de diálogo. En el mismo comunicado, el gobierno culpaba al FMLN de haber roto el proceso al no acudir a la programada cita de Caracas, el 20 de noviembre anterior.

El buen curso de las gestiones de diálogo fue obstruido momentáneamente por el asesinato de Héctor Oquelf, el 12 de enero. Al día siguiente, el FMLN anunció que revisaría su oferta de diálogo. La advertencia no cristalizó en un nuevo rompimiento del proceso, pero el FMLN añadió a su lista de demandas la exigencia de esclarecer el asesinato y castigar a los responsables.

Más que el asesinato de Oquelf, el principal obstáculo con el cual empezaron a tropezar las gestiones de diálogo fue la discrepancia entre ambas partes sobre el rol de intermediación que debía desempeñar el secretario general de la ONU. Mientras el FMLN abogaba por un papel "activo" del mediador, el gobierno aducía que éste debía limitarse a propiciar los contactos entre las partes para el retorno a la mesa de conversaciones. El presidente Cristiani opinaba que Pérez de Cuéllar "debe participar como testigo" porque "el diálogo debe realizarse entre salvadoreños." Cristiani aducía que ése era el verdadero espíritu de los acuerdos de San Isidro de Coronado al solicitar la mediación del secretario general de la ONU para gestionar la pacificación de la región.

El 23 de enero, al comentar la postura gubernamental, el secretario general del Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), Rubén Zamora, declaró que Cristiani "claramente re-

trocede al dar a Pérez de Cuéllar un papel de testigo. Creemos que esto es gravísimo para el futuro del país porque claramente indica que, de nuevo, el gobierno intentará un diálogo de apariencias sin entrar en la negociación... necesitamos un mediador fuerte y de prestigio que reinicie el diálogo en El Salvador, de tal manera que, tanto al gobierno como al FMLN, les sea difícil rechazar sus propuestas."

El 29 de enero, en vísperas de partir a New York, Cristiani reiteró a la prensa que el objetivo principal de su visita a Estados Unidos era reunirse con Pérez de Cuéllar "para buscar mecanismos que faciliten la reanudación del diálogo con el FMLN," si bien lamentó que el FMLN "está enviando señales contradictorias." "Por una parte —explicó— expresan su voluntad de reanudar las conversaciones y por otra nos llega información de que siguen planificando ataques contra la capital y acciones terroristas contra la estructura económica del país." El 31 de enero, Pérez de Cuéllar recibió a Cristiani en New York. Al día siguiente, Cristiani viajó a Washington, para entrevistarse con el presidente Bush. Al concluir la entrevista, Bush reiteró una vez más su respaldo a Cristiani: "lo apoyo ahora. Lo apoyaré en el futuro. El éxito de la democracia en El Salvador es una cosa muy importante para nosotros."

El 2 de febrero, el secretario de Estado, James Baker, telefoneó a Pérez de Cuéllar para manifestarle el respaldo norteamericano "para que haga todo lo que pueda para llevar la paz" a El Salvador. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado reiteró que "la única solución sensible y humana (al conflicto salvadoreño) es a través de un acuerdo político negociado bajo los términos del proceso de paz para Centroamérica." "Apoyamos con firmeza ese objetivo y damos la bienvenida al compromiso activo del secretario general de la ONU para ayudar a promover una solución negociada a la guerra," añadió la portavoz. El mismo día, en Washington, el presidente Cristiani confirmó su aceptación de la mediación de Pérez de Cuéllar, pero reiteró que las conversaciones "se han de realizar entre salvadoreños."

Los días 1 y 2 de febrero, Alvaro de Soto reanudó sus consultas con el FMLN para discutir la reactivación del diálogo. Las reuniones de trabajo tuvieron lugar en México, D.F. En representación del FMLN acudieron la comandante Ana Guadalupe Martínez y Salvador Samayoa. En un comunicado difundido el día 2, en San Salvador, el FMLN informó que las reuniones con De Soto habían "contribuido a esclarecer la situación, después de las innumerables declaraciones negativas sobre la reanudación de las negociaciones, hechas por representantes del gobierno y del ejército." Asimismo, el Frente reafirmó que la mediación del secretario general de la ONU "compromete seriamente a ambas partes a negociar y ofrece posibilidades reales para una solución al conflicto." Por otra parte, advirtió que el incremento de la ayuda militar para El Salvador, como lo proponían algunos sectores del gobierno de Bush, "expresaría una clara decisión de prolongar la guerra, fortalecería a los extremistas y haría fracasar la posibilidad abierta de solución negociada." Finalmente, puntualizaba su disposición a "mantenernos en guerra y hacer uso ofensivo de nuestra fuerza mientras haya represión y grandes ofensivas militares en el campo y no exista un cese de hostilidades concertado por ambas partes."

El 5 de febrero, el Dr. Guillermo Ungo visitó a Pérez de Cuéllar, pero éste no pudo atenderlo por tener que acudir a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada por Cuba para tratar el ataque de un guardacostas norteamericano a un barco mercante cubano, perpetrado el 31 de enero. No obstante, Ungo se reunió con Alvaro de Soto. Posteriormente, el propio Pérez de Cuéllar indicó que la visita de Ungo se enmarcaba dentro de las gestiones para reanudar el diálogo en El Salvador.

A esa altura, el clima para el diálogo había mejorado sensiblemente, al punto que, el 7 de febrero, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) evacuó a 32 combatientes lisiados del FMLN que permanecían desde el 7 de noviembre anterior en la iglesia de El Calvario. Los lisiados fueron trasladados al aeropuerto de Comalapa, de donde partieron a La Habana haciendo escala en

México. Llegaron en la madrugada del día 8 al aeropuerto José Martí, donde fueron recibidos por personal médico, representantes del FMLN y autoridades cubanas. El 1 de febrero, la asamblea legislativa había aprobado un decreto de amnistía para la evacuación de los lisiados, decreto al que éstos rehusaron acogerse.

Otro signo propiciador de una nueva atmósfera para el diálogo fue la última etapa del proceso de repatriación de los refugiados salvadoreños residentes en Honduras. El 27 de febrero, la comisión tripartita integrada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los gobiernos de Honduras y El Salvador, clausuró oficialmente el campamento de refugiados de Colomoncagua. Ese día iniciaron su repatriación hacia Meanguera (Morazán) los últimos 960 refugiados que quedaban en Colomoncagua. Juan José Rodríguez, coordinador de los refugiados, informó que aproximadamente 9 mil refugiados retornaron al país en 16 oleadas desde finales del año pasado para repoblar Meanguera. En esta localidad fueron instalados tres asentamientos, habitados por 4,848 menores, 2,442 mujeres, 1,114 hombres y 500 ancianos. "Nuestro principal objetivo —indicó— es mantener el mismo nivel de vida que tuvimos en Colomoncagua, donde la población refugiada tenía asegurada su alimentación diaria, consistente en arroz, frijol, maíz, dos pares de zapatos y dos juegos de ropa anuales." Denunció, no obstante, que el ejército impedía el libre tránsito de alimentos y personas hacia la repoblación y había corrido entre los pobladores vecinos el rumor de que los repatriados llegaban a "quitarles sus pertenencias y que son subversivos."

Sin embargo, pese a la evacuación de los lisiados y al proceso de repatriación de los refugiados, la situación global de los derechos humanos resintió todavía las secuelas del último bimestre de 1989. El caso más publicitado fue el asesinato del Dr. Héctor Oquell, subsecretario del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y secretario general adjunto de la Internacional Socialista (IS) para América Latina y el Caribe. Oquell había llegado a Guatemala el 11 de enero, procedente de México. El 12 partiría a Nicaragua,

donde se uniría a una delegación de la Internacional Socialista que visitaría este país para observar el desenvolvimiento del proceso electoral. En la mañana de ese día, cuando se dirigía al aeropuerto en compañía de la Licda. Hilda Flores, del Partido Social Demócrata de Guatemala, fueron interceptados por un vehículo en el cual se conducían "hombres vestidos de civil y fuertemente armados." Ambos cadáveres aparecieron pocas horas después, con un tiro en la sien, en la localidad de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, en una zona fronteriza con El Salvador. El gobierno guatemalteco ordenó, sin resultados exitosos, un operativo extraordinario para dar con los culpables, el cual incluyó el cierre de las fronteras, y anunció su decisión de pedir ayuda internacional para capturar al "comando extranjero" que asesinó al Dr. Oquell y a su acompañante. El ministro de gobernación, Carlos Morales, afirmó que los asesinos son "comandos internacionales" apoyados por guatemaltecos "involucrados en esta clase de actividades."

El secretario general del Partido Social Demócrata de Guatemala, Mario Solórzano, afirmó que "estos crímenes sin sentido vienen a demostrar la existencia de un trabajo coordinado entre grupos paramilitares de El Salvador y Guatemala, ya que no se puede explicar de otra manera el hecho de que se pudiera conocer la llegada de Oquell a Guatemala y se montara todo un aparato para su secuestro. Oquell llevaba sólo 12 horas en el país cuando fue secuestrado." El 16 de enero, el partido social demócrata alemán (SPD) aprobó, en Bonn, una resolución de condena en la cual expresó que las huellas de los asesinos "conducen al campo del extremismo de derecha en El Salvador." Los "verdes" afirmaron que el asesinato fue "el resultado de la cooperación de los escuadrones de la muerte de Guatemala y El Salvador."

El ministerio alemán de relaciones exteriores manifestó su "repugnancia e indignación ante el cobarde acto cometido por despiadados extremistas que no se paran ante la violencia más brutal para alcanzar sus metas privadas o políticas". Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado

norteamericano calificó el asesinato de "indignante violación a los derechos humanos" y opinó que la acción obedecía a "un intento de imposibilitar la actividad política pacífica y anular las conquistas obtenidas por la democracia en la región en los últimos años." También informó que Estados Unidos había solicitado al gobierno guatemalteco, "en los términos más enérgicos", una investigación "urgente, profunda y profesional" del doble asesinato.

El gobierno salvadoreño rechazó toda responsabilidad en el crimen. El 16 de enero, la Fuerza Armada emitió un comunicado en el cual condenó "enérgicamente" el asesinato, afirmó que éste "ha causado mucho pesar en los círculos sociales, organizaciones políticas y sectores que apoyan la democracia," e incluso destacó la participación del MNR "en el proceso democrático" del país. Al mismo tiempo, demandó del gobierno guatemalteco efectuar "exhaustivas investigaciones para determinar, si fuera posible, quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de este crimen." Un día después, el presidente de ARENA y alcalde de San Salvador, Dr. Armando Calderón Sol, manifestó que "Guatemala debe esclarecer el doble crimen porque el FMLN responsabilizó al gobierno del presidente Cristiani y al partido ARENA del hecho."

El 20 de enero, arribó al país una delegación de la Internacional Socialista, presidida por su secretario general, Luis Ayala. También formaban parte de ella el secretario general del MNR, Dr. Guillermo Ungo; el dirigente de Acción Democrática de Venezuela, Timoteo Zambrano; el Dr. Wolfgang Weege, del Partido Social Demócrata alemán; y Dan Heat, del Nuevo Partido Demócrata de Canadá. El 21, los visitantes se reunieron con el coronel Ponce para solicitarle la colaboración de la Fuerza Armada en la investigación del asesinato del Dr. Oquell. Un día después se entrevistaron con el presidente Cristiani, a quien expusieron su preocupación por "la falta de garantías y de espacio para los partidos democráticos." En conferencia de prensa, el Dr. Ungo afirmó que "El Salvador no puede descargar todo el peso de la investigación en Guatemala, porque se sabe que existen lazos entre la extrema

derecha de los dos países desde hace muchos años." Ungo recordó que los propios sindicatos guatemaltecos habían denunciado recientemente los frecuentes viajes a ese país de "personas bien conocidas por su vinculación con los escuadrones de la muerte," como Antonio Regalado, a quien el gobierno de Duarte acusó de ser el asesino material de Monseñor Romero. En diciembre anterior, la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) había denunciado la presencia en dicho país de un comando armado salvadoreño, el cual estaba "acosando y persiguiendo" a varios líderes populares de El Salvador, entre ellos el dirigente de la CGT, José Luis Grande Preza.

El asesinato de Oquell ocurrió justamente cuando el gobierno salvadoreño pensaba que la situación ya se había normalizado. De hecho, dos días antes había retornado a El Salvador la misión de la ONU, luego de que el canciller Pacas Castro le aseguró a Pérez de Cuéllar que ésta contaría con todas las garantías necesarias para trabajar. La misión había tenido que abandonar el país el 1 de diciembre anterior, debido a que el ejército destruyó su sede, según lo denunció su director, Gonzalo Pérez del Castillo. El 10 de enero, el nuevo director, Walter Franco, declaró que "regresamos ahora porque las condiciones han cambiado y existe una relativa normalidad."

El 22 de enero, Pacas Castro calificó de "altamente satisfactoria" la "ofensiva diplomática" realizada por siete misiones gubernamentales que visitaron Canadá, Estados Unidos, México, España, Italia, el Vaticano, Bélgica, Holanda, Francia, Uruguay, Argentina, Chile, Jamaica, Haití, República Dominicana y Santa Lucía, "para defender la imagen del país ante la desinformación que existe sobre los derechos humanos en El Salvador." Las delegaciones fueron recibidas por seis jefes de Estado, siete cancilleres, ocho viceministros de relaciones exteriores y otros funcionarios de alto nivel. Según Pacas Castro, como resultado de la ofensiva diplomática, "se logró el pleno reconocimiento a la legitimidad del gobierno salvadoreño y el apoyo claro al proceso democrático, aunque siempre existe preocupación por la situación de los derechos humanos."

Uno de los jefes de misión, el coronel Juan

Antonio Martínez Varela, informó que "el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas fue el punto en el cual fijaron sus observaciones los distintos funcionarios europeos visitados. Nos manifestaron su escepticismo sobre la transparencia de las investigaciones y nos pidieron pruebas de las intenciones del gobierno de aclarar el hecho." Las presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, aunadas al boicot de los compradores del café salvadoreño, empezaron a surtir efecto en el esclarecimiento de la masacre de la UCA.

El domingo 7 de enero, a través de cadena nacional de radio y televisión, el presidente Cristiani admitió que, de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, los responsables de la masacre pertenecían a la Fuerza Armada. Era la misma conclusión a la cual había llegado el informe que la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado presentó el 28 de noviembre, esto es, casi mes y medio antes. El sábado 13 de enero, a través de una nueva cadena, Cristiani reveló la identidad de los asesinos. Según el informe de la Comisión Investigadora, la masacre fue comandada por los tenientes Yushy René Mendoza Vallecillos, comandante de sección en la Escuela Militar "Capitán General Gerardo Barrios," y José Ricardo Espinoza Guerra, comandante de compañía de la unidad de comandos del batallón Atlacatl; secundados por el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, los subsargentos Antonio Ramiro Avalos Vargas (alias "Satanás") y Tomás Zarpate Castillo, el cabo Angel Pérez Vásquez y los soldados Oscar Mariano Amaya Grimaldi (alias "Pilijay") y Jorge Alberto Sierra Ascencio, todos ellos de alta en el batallón Atlacatl. Este último desertó a finales de diciembre. Los tres oficiales (Espinoza Guerra, Mendoza Vallecillos y Guevara Cerritos) aseguraron que la orden de ejecutar a los jesuitas les fue dada personalmente por el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, director de la Escuela Militar y ex jefe de inteligencia del Estado Mayor.

Aparentemente, la revelación fue tan fulgurante que el embajador norteamericano, William Walker, no estaba enterado de ella ni si-

quiera una semana antes. Todavía el 2 de enero, al reunirse en Washington con el representante Joe Moakley, presidente de la comisión designada por el Congreso para monitorear el desarrollo de las investigaciones sobre la masacre, Walker le indicó que no había ninguna evidencia que implicara a ningún individuo o grupo en la masacre. Según Moakley, Walker incluso afirmó la posibilidad de que el FMLN hubiera asesinado a los jesuitas.

Sin embargo, dentro del ejército habían corrido rumores muy tempraneros sobre la participación de Benavides en la masacre. El 2 de enero, un asesor militar norteamericano informó a sus superiores que había tenido noticia de la participación de oficiales salvadoreños en la masacre. El asesor obtuvo la información a comienzos de diciembre, de labios del coronel Carlos Armando Avilés, jefe del departamento de operaciones psicológicas de la Fuerza Armada, pero se la había reservado aduciendo que suponía que la embajada y el Alto Mando ya contaban con ella, puesto que Avilés y otros oficiales manejaban los datos. El 5 de enero, el responsable del grupo de asesores militares norteamericanos, coronel Milton Menjívar, reportó al coronel Ponce la información sobre Benavides, tras obtenerla del asesor. Menjívar no sólo se limitó a comunicarle el dato, sino que también le dijo que su fuente era el coronel Avilés. Este fue arrestado. En conjunto, los datos sugerían que varios oficiales de la Fuerza Armada sabían desde un principio de la responsabilidad de Benavides y de los comandos del Atlacatl, pero optaron por cubrirles las espaldas. Por eso, el anuncio de Cristiani fue tardío.

En cualquier caso, la revelación del mandatario provocó considerable conmoción en diversos sectores, sobre todo en los medios políticos y periodísticos que habían defendido la hipótesis de que el FMLN era el responsable de la masacre. El propio canciller de la república, Dr. José Manuel Pacas Castro, había achacado el hecho a "un acto desesperado de la izquierda" (*El Diario de Hoy*, 17 de noviembre de 1989, p. 5). El vicecanciller Ricardo Valdivieso había manifestado que "el FMLN busca hacerle más difícil la situación al gobierno con el asesinato de los seis

padres jesuitas" (*La Prensa Gráfica*, 18 de noviembre de 1989, p. 25). El Centro de Información Nacional (CIN) había expresado que la masacre se llevó a cabo para "aumentar más el clima de zozobra y angustia creado por el FMLN contra la ciudadanía salvadoreña" (*El Mundo*, 16 de noviembre de 1989, p. 3). El Fiscal General consideró desde un principio que "sería temerario" responsabilizar de la masacre a elementos del ejército. El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Romeo Tovar Astorga, declaró que no le parecía "lógico" que la masacre hubiera sido realizada por efectivos de la Fuerza Armada. Hasta Monseñor Pablo Antonio Vega, desde Miami, afirmó que según sus informaciones lo más probable era que el FMLN había cometido el asesinato. Repentinamente, el presidente de la república, respetado por todos ellos, salió diciendo que los asesinos de los jesuitas no fueron "terroristas" del FMLN, sino efectivos del ejército de El Salvador.

El shock psicológico de ciertos sectores de la derecha fue tal que, a pesar del anuncio de Cristiani, no lograron asimilar inmediatamente la verdad de los hechos. El 15 de enero, el presidente de ARENA, Dr. Armando Calderón Sol, manifestó que la masacre de los jesuitas "es algo tan horrendo, tan monstruoso, que hay que investigar la posibilidad de que el FMLN preparara ese asesinato para desprestigiar al gobierno." En esa línea, enfatizó que el gobierno salvadoreño "está obligado a descubrir a los autores de la muerte de los jesuitas y ver si hay algún nexo entre los militares involucrados y el FMLN." Según el Dr. Calderón Sol, "los responsables actuaron con iniciativa propia, para provocar problemas al gobierno del presidente Cristiani, para desprestigiarlo; no es posible que sea un hecho aislado, las investigaciones van apuntando a un tipo de conjura." La hipótesis del Dr. Calderón Sol pareció tan descaminada que incluso el comandante de la Primera Brigada de Infantería, coronel Francisco Elena Fuentes, lo instó a apoyar con pruebas objetivas una acusación tan grave.

Una apreciación mínimamente realista de la situación hubiera mostrado al Dr. Calderón Sol que, si en alguna conjura se había decidido el

asesinato de los jesuitas, ésta se había dado entre Benavides y otros oficiales de alto rango, no entre Benavides y el FMLN. El propio Cristiani admitió ante la prensa norteamericana que en diversos círculos castrenses prevalecía el prejuicio de que los jesuitas eran aliados del FMLN, aunque él, en lo personal, opinaba que sus críticas "siempre se mantuvieron dentro de los límites de la democracia" (declaraciones ante el programa *Good Morning America*, de la ABC, el 16 de enero). En su oportunidad, el Viceministro de Defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, acusó a la UCA de ser el centro de operaciones donde se había fraguado el asesinato del Fiscal General García Alvarado (*El Diario de Hoy*, 20 de abril de 1989, p. 2). El Viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Montano, consideraba a los jesuitas de la UCA como "individuos plenamente identificados con los movimientos subversivos" (*El Diario de Hoy*, 22 de agosto de 1989, p. 3). Según se desprende de las confesiones extrajudiciales de los autores materiales del crimen, sus superiores les dieron justamente este tipo de argumentos para justificar la masacre. El teniente Espinoza Guerra, al transmitirles las instrucciones para la operación, les dijo que en la UCA se planeaban "los ataques a las instalaciones militares y población civil" y que los curas de allí "apoyaban con todo" al FMLN.

El 16 de enero, Benavides y el teniente Mendoza Vallecillos comparecieron ante el Juez Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Zamora. Los seis implicados restantes alegaron sentirse "mal de salud," aun cuando el médico forense dictaminó que todos estaban en perfectas condiciones físicas; comparecieron al día siguiente. Como lo hiciera en sus declaraciones extrajudiciales, Benavides negó pertinazmente, ante el juez, que hubiese ordenado la masacre. Los otros oficiales, aconsejados por sus defensores, se retractaron de sus confesiones extrajudiciales, aduciendo que habían sido "sometidos a coacción física" y presiones intimidatorias por parte de la Comisión Investigadora. No obstante ello, el 19 de enero, el Dr. Zamora confirmó la detención provisional de todos los implicados. El 22 de enero, los defensores apelaron contra la detención aduciendo

que las confesiones extrajudiciales de sus defendidos "adolecen de un defecto que las vuelven inválidas, y es el hecho que nuestros acusados las ofrecieron después de las 72 horas de ser capturados." Uno de los abogados defensores, el Lic. Oscar Caballero Peñate, declaró que "hemos criticado la declaración extrajudicial porque es una prueba amañada, y no hay manera de comprobar lo que dijeron; además nuestros defendidos fueron sometidos a una presión psicológica." Según el Lic. Caballero, "no existen elementos de juicio para la detención porque el juez ha tomado como base para decretarla las pruebas extrajudiciales" (el Lic. Caballero actuó a comienzos de 1989 como apoderado legal de Antonio Regalado, a quien la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos acusó como presunto asesino material de Monseñor Romero). El 25 de enero, la Fiscalía declaró sin lugar la revocatoria del auto de detención provisional solicitada por la defensa. Cuatro días después, el juez declaró sin lugar la apelación.

La revelación de Cristiani tuvo también un importante efecto en la opinión pública y los medios políticos y periodísticos norteamericanos y, particularmente, en las discusiones del Congreso sobre la continuación de la asistencia económica y militar al gobierno salvadoreño. Su efecto fue ambivalente. Por un lado, Cristiani parecía mostrar una efectiva disposición a velar para que el ejército de El Salvador empezara, por fin, a respetar los derechos humanos. Por otro lado, sin embargo, la magnitud de la masacre y el hecho de que la orden hubiera provenido de esferas militares tan altas desenmascaraba el tipo de ejército que había en El Salvador.

De una parte, un sector del Congreso opinaba que el cese de la ayuda equivaldría a dar al FMLN la victoria que no pudieron conseguir en el campo de batalla, y dejar a su suerte a un gobierno que tanta voluntad estaba demostrando a favor de la democratización del país. Otro sector opinaba que, tras 10 años de esfuerzos norteamericanos para democratizar a la Fuerza Armada de El Salvador, y más de 5 mil millones de dólares de ayuda, no se había cosechado ningún fruto de consideración. La movilización pública en contra de la ayuda fue

notable. El 24 de enero, el secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, compareció ante el Congreso; su audiencia fue interrumpida varias veces por las protestas de los manifestantes organizados por el grupo *Pledge of Resistance*. La policía detuvo por lo menos a 25 manifestantes. El día anterior habían sido detenidos otros 37, entre ellos el actor Martin Sheen.

En el contexto de estas discusiones, el 19 de enero, una delegación de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, integrada por Mark Woleson (conservador), Peter Archer (laborista) y Russell Johnston (unión de socialdemócratas y liberales), presentó en Washington un informe sobre los resultados de su visita a El Salvador, hecha entre el 14 y 17 de enero. Los parlamentarios británicos afirmaban que la ayuda norteamericana al gobierno salvadoreño estaba "lejos de ser efectiva" y recomendaban que la asistencia militar se destinara "al apoyo directo de los derechos humanos." "En caso de no hacerlo así —aducían— la política internacional sobre derechos humanos del presidente Bush se verá seriamente desacreditada." Asimismo, lamentaron que la situación de los derechos humanos en El Salvador continuaba siendo muy precaria: "personas o grupos opuestos al gobierno son objeto de detenciones y frecuentes torturas, brutales en algunos casos. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones perpetradas por los escuadrones de la muerte y fuerzas de seguridad continúan llevándose a un ritmo de doce por mes."

El 6 de febrero, los senadores Edward Kennedy y John Kerry propusieron la suspensión total de la ayuda, exceptuada la humanitaria, hasta que el gobierno salvadoreño cumpliera seis condiciones: castigar a los asesinos de los jesuitas y de Héctor Oquellí; garantizar un efectivo ejercicio de las libertades de expresión, de prensa, de asociación y de organización sindical; cesar la persecución religiosa; depurar a la Fuerza Armada de los efectivos y oficiales comprometidos en violaciones de los derechos humanos; autonomizar institucionalmente a los cuerpos de seguridad del ejército, poniéndolos bajo mando civil; y mostrar una efectiva disposición a dialogar con el FMLN

para solucionar políticamente el conflicto.

Por los mismos días, nuevos datos logrados por la prensa norteamericana sobre la masacre de la UCA abonaron la necesidad de imponer mayores restricciones sobre la Fuerza Armada para comprometerla a no violar los derechos humanos. Según sendos artículos de Ana Arana y Douglas Farah, publicados en el *Miami Herald* del 5 de febrero y en el *Washington Post* del 6 de febrero, respectivamente, la masacre fue precedida por una reunión de comandantes, llevada a cabo la noche del miércoles 15 de noviembre, y sucedida por otra reunión de oficiales, tenida en la mañana del jueves 16 en la Dirección Nacional de Inteligencia de la Fuerza Armada.

En la reunión de la noche del miércoles habrían participado unos 30 oficiales, incluido el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, quienes discutieron un plan que incluía el asesinato de los cabecillas de la insurgencia y la destrucción de los puestos de comando del FMLN. La atmósfera de la reunión era depresiva. Los comandantes compartían la convicción de que la guerra podía estarse jugando en la ofensiva si no se recurría a medidas extraordinarias. Fue precisamente en dicha reunión que el Alto Mando decidió recurrir al uso intensivo de la aviación, la artillería y las unidades mecanizadas para desalojar al FMLN de sus posiciones. La reunión concluyó hacia las 10:30 de la noche, cuando todos los oficiales se tomaron de la mano y rezaron una oración. A esas horas, despertaron al presidente Cristiani para pedirle autorización para usar la aviación y la artillería pesada. El coronel Benavides abandonó la reunión minutos después. Según las declaraciones extrajudiciales de los tenientes que comandaron la masacre, fue aproximadamente a esa hora que Benavides convocó a la unidad de comandos del Atlacatl para llevar a cabo la "misión" en la UCA. La masacre ocurrió unas tres horas después. La segunda reunión tuvo lugar en la mañana del jueves 16, unas seis horas después de la masacre. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia —donde la CIA dispone también de una oficina. De acuerdo a oficiales presentes, los participantes aplaudieron cuando un oficial irrum-

pió anunciando que el P. Ellacuría había sido eliminado.

Todas las fuentes aseguraron que ninguna de las reuniones fue convocada *ad hoc* para tratar la situación de los jesuitas ni, mucho menos, para planificar su asesinato o evaluar las consecuencias de éste. Según los oficiales presentes en la reunión del miércoles, en ella no se dijo nada que pudiera haber inducido al coronel Benavides a ordenar la masacre. Con todo, admitieron que la atmósfera en la cual se llevó a cabo la reunión podría haber inducido a Benavides a emprender tal iniciativa. También explicaban su decisión a partir de la considerable presión psicológica a que estaba sometido, debido a que su hijo menor había quedado paralizado por un virus dos días después de que el FMLN iniciara la ofensiva. En aquel momento, Benavides atribuyó la parálisis de su hijo a la tensión que le provocó la ofensiva; sólo después se determinó que la causa era el virus.

En el contexto de estas revelaciones, el 14 de febrero, la misión de congresistas norteamericanos que monitorea la investigación de la masacre de la UCA, ofreció un informe preliminar de su visita de cuatro días al país. En el informe, la misión estimaba que "todavía quedan por investigar pistas y argumentos importantes, tales como informes que sugieren que los autores intelectuales de los asesinatos pueden no haber sido identificados y sugerencias que indican que pudo haber encubrimiento de parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, con respecto a este crimen. Hacemos notar que a este respecto, el coronel Ponce nos dijo que no hubo ni una persona dentro del cuerpo militar, ni una tan siquiera, que se presentara a informarle acerca de la complicidad del ejército en los asesinatos. Por lo tanto, nos unimos a nuestro embajador para pedir que se insista en que estos argumentos específicos sean investigados a fondo. Con respecto a la siguiente fase del proceso judicial, vemos con temor que la evidencia disponible hasta este momento podría ser insuficiente para llevar a todos los asesinos ante la justicia."

Una semana después, el 22 de febrero, el *Washington Post* publicó un artículo de Douglas Farah sobre el trato privilegiado que gozaba el

coronel Benavides. La noticia fue recogida por el *Miami Herald* dos días después. Según la información, Benavides vivía en un apartamento de lujo en la Policía Nacional y recibía regularmente la visita de sus compañeros de armas, quienes le estaban ayudando a fraguar una estrategia para evadir la justicia. También había sido visto varios fines de semana, acompañado de familiares, en el hotel Paradise, que la Fuerza Armada tiene sobre la costa del Pacífico. De acuerdo a una fuente gubernamental consultada por el *Washington Post*, Benavides "tiene un apartamento privado. Recibe visitas privadas y se le sirve comida especial. Vive muy confortablemente." La fuente añadió que el presidente Cristiani estaba molesto por esas comodidades, pero consideraba que esa situación era tolerable mientras Benavides permaneciera confinado.

Por su parte, un funcionario de la embajada norteamericana declaró al *Post*: "tengo entendido que Benavides no está sufriendo propiamente los rigores de la cautividad, sino que vive con todas las comodidades. Es visitado regularmente por sus compañeros de la tandoná, quienes le brindan un ambiente confortable. Yo encuentro eso chocante. La tandoná debería darse cuenta qué mal se ve estar acuerpando y protegiendo a toda costa a un compañero que ha cometido un crimen tan repudiable. Ciertamente no va en crédito de la tandoná lo que está haciendo." En la misma línea, el embajador Walker expresó que "si el coronel Benavides dio la orden (de la masacre), debe ser castigado. Y si sus compañeros de promoción no lo entienden, deben ser removidos." El propio secretario de Estado, James Baker, afirmó sentirse "indignado" por tal situación, y prometió que Estados Unidos trataría el asunto con el gobierno salvadoreño.

El caso de los jesuitas tuvo numerosos efectos colaterales. Uno de ellos fue el tensionamiento de las relaciones inter-generacionales en la Fuerza Armada. Según el artículo de Douglas Farah, el trato privilegiado que recibía Benavides generó considerables tensiones entre la tandoná y las tandas subalternas. Mientras Benavides poseía un apartamento de lujo en la Policía Nacional, los otros oficiales detenidos se encontraban confina-

dos en celdas mucho más pequeñas y no gozaban de los mismos privilegios. Los oficiales jóvenes temían, además, que los tenientes fuesen castigados por el asesinato que Benavides les ordenó, mientras éste salía libre. Al parecer, tal situación agudizó viejas tensiones producidas por la misma estructura jerárquica de la Fuerza Armada. Un alto funcionario de la embajada norteamericana manifestó a Farah: "estoy cada vez más convencido de que el mayor impedimento para la profesionalización de la Fuerza Armada salvadoreña es la estructura de tandas, dentro de la cual la fidelidad primera se expresa a la tanda, no a la institución entera o al país. Esto es lo que muestra el respaldo dado a Benavides por la tandona."

El caso de los jesuitas también tensionó las relaciones entre los asesores norteamericanos y el ejército salvadoreño y entre la línea moderada de Cristiani y los sectores más duros de la Fuerza Armada. Pese a las afirmaciones públicas de respaldo de algunos jefes militares a la decisión de enjuiciar a los responsables de la masacre, el anuncio de Cristiani generó bastante malestar en el ejército. Incluso se difundieron rumores sobre un presunto golpe de Estado en dos fines de semana sucesivos. De acuerdo a los rumores, entre los militares descontentos estaba el general Juan Rafael Bustillo. A comienzos de enero, el general Bustillo había renunciado formalmente a la dirección de la Fuerza Aérea y solicitado pasar a retiro. Aunque el propio Bustillo descartó que su renuncia se debiera a discrepancias con el gobierno sobre el caso de los jesuitas o sobre la conducción de la guerra, formuló fuertes críticas al respecto.

El 17 de enero, Cristiani descartó los rumores de golpe "porque hemos hablado con todos los comandantes y todos ellos parecen estar de acuerdo con tratar de llegar al meollo del caso y tener a la Fuerza Armada como una institución limpia," aunque "obviamente que hay un poco de expresión de insatisfacción." Empero, aplazó hasta fines de mes el viaje a Estados Unidos que tenía programado hacer entre el 16 y 23 de enero. La excusa para el aplazamiento de la gira fue que el secretario general de la ONU, con quien tenía previsto entrevistarse, no estaría en New York en

las fechas originalmente programadas.

Las versiones sobre un presunto golpe recibieron más pábulo cuando Cristiani anunció, en el mismo contexto, que en breve haría cambios en el gabinete, los cuales incluirían el Ministerio del Interior. De acuerdo al anuncio, el Vicepresidente Merino dejaría la cartera del interior para concentrarse en "una vicepresidencia ejecutiva con funciones especiales." El propio Merino explicó que "la idea de mi traslado es poder concentrarme más en las tareas ejecutivas ya que el presidente tendrá un año de mucha actividad fuera del país; hemos estado preparando una vicepresidencia activa, cargo que antes ha sido meramente decorativo;" al mismo tiempo, calificó de "patrañas marxistas" las versiones sobre presuntas tensiones entre Cristiani y él. Los cambios de gabinete tuvieron lugar un mes más tarde. El 16 de febrero, el presidente Cristiani anunció que el Ministro de la Presidencia, coronel Juan Antonio Martínez Varela, sería el nuevo Ministro del Interior, en sustitución de Merino. El Viceministro del Interior, coronel Carlos Humberto Figueroa, fue nombrado presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). En sustitución suya fue nombrado el Dr. Jorge Martínez, quien fungía como Viceministro de Agricultura.

A esa altura, Cristiani consideraba que la situación política era ya lo suficientemente estable como para ausentarse del país sin mayores riesgos. El 18 de febrero, partió a Taiwán, donde permaneció casi una semana en visita oficial. El 26, viajó a Tegucigalpa, para asistir a la asunción presidencial de Rafael Callejas.

Otros acontecimientos relevantes ocurridos en el ámbito político fueron la solicitud de antejuicio contra el Fiscal General, Dr. Mauricio Eduardo Colorado; y el fallecimiento del expresidente Duarte. A comienzos de enero, los diputados del Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) presentaron una solicitud de antejuicio contra el fiscal, pero la fracción de ARENA desatendió la moción. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que el fiscal se viera comprometido en otra situación impropia de su cargo. El 25 de enero, el Dr. Ricardo Zaldívar Baldwin y la Lic. Elizabeth Zaldívar de Bustamante, accionistas mayoritarios

de la firma *Helga S.A. de C.V.*, propietaria del Hospital Zaldívar, lo acusaron de usurpación violenta, violación de lugar de trabajo, amenaza agravada y coacción agravada, y presentaron a la asamblea legislativa una solicitud de antejuicio en su contra. Según los denunciantes, el 12 de enero, el Dr. Colorado, apoderado de la gerente general del hospital, Linda Zaldívar de Gallegos (accionista minoritaria de la firma y hermana de los denunciantes, con quienes sostenía un pleito familiar) irrumpió violentamente en el hospital "acompañado por un séquito de 20 hombres fuertemente armados;" intimidó al personal médico, paramédico y administrativo; y se posesionó de la oficina de la gerencia general, a donde mandó llamar al Dr. Zaldívar, a quien comunicó que el hospital había pasado a ser propiedad de una nueva firma y que si quería "la tercera parte de las acciones de la nueva sociedad tendría que entregar sus acciones de *Helga* si no quería perder todo." Como el Dr. Zaldívar no aceptó la "oferta," el personal de seguridad del Dr. Colorado le impidió ingresar al hospital. Un día después, los guardaespaldas tomaron su mobiliario e instrumental médico para impedirle trabajar. Aunque el fiscal alegó que la acusación respondía a una maniobra política para desprestigiarlo, esta vez la asamblea admitió estudiar la solicitud de antejuicio.

En la última semana de febrero, la muerte del expresidente Duarte fue el acontecimiento que acaparó la atención pública. Duarte falleció el 23 de febrero en su residencia de la colonia San Benito, después de una agonía de varios meses a consecuencia del cáncer que padecía en el aparato digestivo. Su funeral constituyó una manifestación de duelo multitudinaria y espontánea, a la cual concurren los presidentes Oscar Arias y Vinicio Cerezo, el Vicepresidente Dan Quayle, el ex presidente Azcona Hoyos y otras personalidades políticas nacionales e internacionales, principalmente de la democracia cristiana.

Económicamente, la característica más relevante de los primeros dos meses del año fue el generalizado malestar social provocado por los efectos del programa de ajuste estructural de la economía impulsado por el gobierno. A partir del

1 de enero, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) incrementó las tarifas del servicio de agua potable. Tres días después, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) anunció el incremento de un 20 a 30 por ciento de las tarifas de la energía eléctrica para consumo industrial y comercial. Tanto la ANDA como la CEL adujeron que las tarifas vigentes no les permitían cubrir sus costos de operación y mantenimiento, ni, mucho menos, hacer las inversiones necesarias para la expansión de sus servicios. Las nuevas tarifas del agua y de la electricidad, sumadas a otras medidas fiscales, cambiarias y de precios, generaron un clima de considerable malestar e incertidumbre en los empresarios, especialmente en los agrupados en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES).

Al mismo tiempo, la "flotación" del tipo de cambio del colón con respecto al dólar, decretada desde julio de 1989, empezó a disparar el precio de las divisas y a crispar los ánimos de los importadores. La CCIES denunció que esta situación no sólo encarecía las importaciones, sino que "inflaba" artificialmente sus utilidades para efectos del impuesto sobre la renta, debido a que la contabilización del costo de adquisición de las divisas tomaba como referencia el tipo de cambio vigente en el mercado bancario.

Incluso en el área fiscal los empresarios se mostraron descontentos. Aunque las nuevas reformas tributarias aprobadas por la asamblea legislativa disminuían significativamente la tasa de los impuestos sobre la renta y el patrimonio de las empresas (especialmente de la gran empresa), la CCIES rechazó categóricamente el sistema de pago a cuenta del impuesto sobre la renta, mecanismo con el cual el gobierno esperaba financiar buena parte de sus gastos corrientes de 1990 sin necesidad de recurrir a créditos del Banco Central de Reserva. Según la CCIES, el pago a cuenta redundaría en "una pérdida de liquidez, en aumento de costes financieros y en una disminución de recursos que podrían utilizarse para incrementar el capital de trabajo o para paliar la apretada situación financiera en que las empresas se encuentran."

En el área de precios, el Ministerio de Economía decretó, a partir de enero, la liberalización del precio de la melaza para la alimentación del ganado, lo cual redundó inmediatamente en un incremento del cien por ciento del precio del galón de melaza. Los grupos empresariales agrupados en la Asociación de Ganaderos (AGES) y la Asociación de Productores de Leche (PROLECHE) reaccionaron airados. El 31 de enero, el presidente de PROLECHE afirmó que el gobierno "no alcanza a ver la magnitud de la crisis del sector ganadero, que desde hace cuatro años viene con una economía de subsistencia, y en los últimos meses, con una economía de pérdidas," y subrayó que el aumento del precio de la melaza "será como un tiro de gracia a la producción ganadera." Con todo, el foco principal de las protestas fue el alza del 24.5 por ciento del precio de la gasolina y del diesel, decretada a partir del 11 de febrero. El Comité Económico Nacional justificó la medida aduciendo que, de otro modo, el gobierno no podría mantener el subsidio del transporte público y del gas licuado. Al mismo tiempo, exhortó a los empresarios a no trasladar dicho aumento a los consumidores, ya que "el precio de estos productos es muy poco significativo dentro del precio total de los bienes y servicios que se comercializan en nuestro país" y advirtió que, en caso contrario, el Ministerio de Economía procedería a tomar las medidas pertinentes para proteger el poder adquisitivo de la población, "especialmente de los más pobres de los pobres."

Tales argumentos calaron poco en los empresarios. El 19 de febrero, la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo (ASDPP) se quejó porque la medida dañaría seriamente a los propietarios de gasolineras, ya que al aumentar sus costos de funcionamiento disminuía sus márgenes de utilidad bruta, lo cual "llevará irremediablemente a la quiebra de nuestras pequeñas empresas con el consiguiente desempleo masivo." Asimismo, responsabilizó del aumento a las cuatro compañías petroleras que operan en el país y lamentó que, "como ha sucedido siempre, que los peces grandes devoran a los chicos."

Un día después, la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS) amenazó con aumentar el precio de los pasajes del transporte colectivo si el gobierno no resolvía la problemática de dicho sector, la cual se veía agravada con el aumento en el precio del diesel. Según AEAS, pese a las declaraciones del gobierno sobre el mantenimiento del subsidio del diesel utilizado para el transporte colectivo, en la práctica, la Dirección General de Transporte Terrestre estaba recortando el número de galones que cada transportista podía adquirir mensualmente a través de la llamada "tarjeta de diesel."

La Asociación de Medianos, Pequeños y Microempresarios Salvadoreños (AMPYMES) señaló que su sector sería uno de los más afectados por el aumento de los costos de producción y de transporte. Según AMPYMES, estas medidas provocarían "una explosión social, porque es sabido que si hay alza en los precios de los combustibles, de hecho todo sube, y hace su aparición la clásica cascada, afectando todas las actividades y golpeando a las capas de menores recursos." La Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) solicitó al gobierno reconsiderar el aumento del precio del diesel, aduciendo que éste es un insumo clave para la industria de la construcción. De persistir la medida, advertía, "se hará menos accesible la adquisición de viviendas de parte de los trabajadores de bajos ingresos y disminuirá la inversión en el rubro de la construcción."

En respuesta a la primera ola de protestas, el 18 de febrero, el presidente Cristiani instó a los sectores empresariales y de clase media a aceptar la cuota de sacrificio y solidaridad que les correspondía dentro del programa de ajuste, a fin de permitirle al gobierno actuar sin presiones en la implementación de "una economía que brinde espacios para que opere la competencia en igualdad de condiciones, una economía fuerte, que no se mantenga con un gobierno enorme y una economía que trate de brindarle protección al que menos tiene, al más necesitado." Mientras tanto, la liberalización de precios preconizada por dicha economía de mercado continuaba haciendo estragos en el poder adquisitivo de los estratos

populares. Los primeros productos cuyos precios aumentaron fueron el gas propano y el aceite comestible, seguidos del pasaje de algunas rutas de buses urbanas e interdepartamentales, cuyos propietarios aprovecharon la coyuntura para eliminar las "tarifas diferenciadas," establecidas en julio del año pasado. También sufrieron sensibles incrementos los precios de muchos productos de la canasta básica, como la carne, pollo, fruta y hortaliza, cereales y productos lácteos.

Las condiciones objetivas parecían bastante propicias para la reactivación de las organizaciones populares, pese a los golpes que les infligió la contraofensiva gubernamental de noviembre-diciembre. El primer frente de reivindicaciones se centró en las protestas contra la política de despidos del sector público. En conferencia de prensa ofrecida el 4 de enero, la dirigencia de la UNTS denunció que el gobierno planeaba despedir a unos 25 mil trabajadores. La CTS, AGEPYM, UNOC y UNTS denunciaron el despido de unos 861 empleados del MAG. La Asociación de Trabajadores del MAG (ANT-MAG) denunció que entre los despedidos se contaban los miembros de diez juntas directivas seccionales y el secretario de conflicto de esa organización. Algunos días después, el MAG reincorporó a sus puestos a 582 trabajadores. También se presentaron denuncias de despidos en el circuito de teatros nacionales, en algunas alcaldías, en el INCAFE, el INAZUCAR, el IRA y el CCE.

Un segundo frente de reivindicaciones se activó en contra del estado de sitio. El 10 de enero, Julio César Portillo, miembro del comité ejecutivo de la UNTS, exigió al gobierno detener la "cacería humana" contra los sectores democráticos y entregar las sedes sindicales y el mobiliario sustraído por el ejército. El 23 de enero, la UNTS anunció acciones conjuntas con otras organizaciones para "ejercer presión por la apertura de espacios políticos cerrados por el gobierno a partir de la ofensiva del FMLN." El mismo día, la UNOC interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de sitio. La iniciativa recibió el respaldo de numerosas organizaciones populares, entre

ellas la UNTS, así como de los partidos políticos de oposición.

Irónicamente, mientras los dirigentes de la UNOC llevaban el recurso a la Corte, efectivos de la Guardia Nacional capturaron al comité ejecutivo de la Central de Trabajadores Democráticos (CTD), filial de la UNOC, cuando sus miembros se disponían a reunirse en la sede de la CTD, ubicada en la urbanización La Esperanza. Entre los detenidos figuraba el presidente de la CTD, Samuel Maldonado. Los efectivos ignoraron el permiso para la reunión, extendido por el propio director de la Guardia Nacional —su comandante— y jefe de plaza de San Salvador, coronel Juan Carlos Carrillo. Los capturados fueron liberados horas después, gracias a las gestiones nacionales e internacionales de organizaciones a las cuales está afiliada la CTD.

El 25 de enero, efectivos de la Policía de Hacienda vestidos de civil y fuertemente armados, quienes se conducían a bordo de dos vehículos particulares, capturaron a los misioneros de la Iglesia Bautista Enmanuel, Vicente Garay, Víctor Manuel Fuentes y Carlos Avalos, cuando éstos salían de las oficinas de la iglesia, ubicada en el barrio San Jacinto.

A partir de la segunda quincena de febrero, la actividad reivindicativa mostraba ya signos muy visibles de recuperación en torno a cuatro ejes principales: denuncia de las acciones represivas contra los dirigentes y miembros de base del movimiento popular, movilización a favor de la solución negociada del conflicto bélico, demanda de mejores prestaciones sociolaborales, y protesta por las nuevas medidas económicas decretadas por el gobierno.

En el campo de las gestiones en favor de la paz, la iniciativa más relevante fue la propuesta de pacificación nacional que la UNOC dio a conocer el 3 de febrero bajo el nombre de "Alternativa para la paz en El Salvador." Por su parte, el 22 de febrero, la UNTS celebró su cuarto aniversario de fundación con un "Encuentro internacional por la paz," en el cual presentó, según lo había prometido días antes, su propuesta para la pacificación nacional. También FEASIES, COA-

CES, CRIPDES, FENASTRAS, CTS y SITAS hicieron demandas en la misma línea; y el Comité Permanente del Debate Nacional desarrolló una importante gestión internacional a favor de la solución política del conflicto.

Las denuncias de capturas, desapariciones y asesinatos no amainaron. El 1 de febrero, el secretario de comunicaciones de la Universidad de El Salvador, Roberto Pineda, solicitó al presidente Cristiani la libertad de 28 universitarios reclusos en diversos centros penales y en la Policía de Hacienda. El 8 de febrero, la Asociación de Trabajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL) denunció "la profundización de un plan de destrucción de organizaciones populares... el gobierno ha aumentado las capturas y despidos injustificados realizados al amparo del estado de sitio." Cinco días después, agentes de la Policía Nacional capturaron al secretario de organización de ASTTEL, Ricardo Lazo. El mismo día, el Sindicato de ANDA (SETA) denunció la captura de Luis Chacón, miembro de su dirigencia. Por su parte, la Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria (CONFRAS) denunció que estaban circulando afiches con fotografías de dirigentes sindicales, entre quienes se encontraba un directivo suyo, Miguel Alemán, a quien, al igual que a los demás, los cuerpos de seguridad acusaban de pertenecer al FMLN. El 15 de febrero, FESTIAVTSCEs denunció las capturas de sus dirigentes, Héctor Daniel García Reyes y Germán Darío Vásquez, acusados por la Guardia Nacional de participar en manifestaciones y pertenecer al Partido Comunista. El 21 de febrero, la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) denunció amenazas y acciones intimidatorias contra dos de sus dirigentes.

El 28 de febrero, la Asociación Democrática Campesina (ADC) denunció la captura, tortura y asesinato de dos jóvenes de la Cooperativa *La Reforma*. El mismo día, Monseñor Gregorio Rosa Chávez denunció la detención de un empleado de proyectos agrícolas del arzobispado, quien se encontraba en la Policía de Hacienda. Monseñor Rosa denunció también que en la semana anterior se habían dado "capturas, amenazas y actos

hostiles" del ejército contra dependencias del arzobispado. "Son preocupantes —indicó— estas visitas y amenazas de soldados, actos aparentemente intrascendentes que pueden terminar en tragedias." Al mismo tiempo, anunció que el arzobispado solicitaría una entrevista con el Estado Mayor para aclarar la "larga lista de hechos y no lamentar tragedias... estos actos responden a una mentalidad en la que se le enseña al hombre de uniforme que el trabajo social de la Iglesia es sospechoso y contrario a la seguridad de la patria. Las campañas de desprestigio y las calumnias terminan por armar los brazos asesinos."

Las protestas contra las nuevas medidas económicas del gobierno fueron especialmente nutridas. El 17 de febrero, la UNOC condenó las medidas porque "están en perjuicio de la raquítica economía de la mayoría de los salvadoreños". El mismo día, COACES subrayó que las medidas agudizarán la inflación "y eso en El Salvador significa muerte." La Asociación Nacional Campesina (ANC) expresó que "el aumento a los combustibles y servicios básicos hace morir pausadamente a los pobres" y denunció el estado de sitio como un mecanismo "para callar las peticiones de justicia, de paz y de cese al conflicto armado." La Asociación de Trabajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL) advirtió que "está muy cerca un descontento popular por las medidas económicas." La Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) externó su "repudio ante las nuevas medidas económicas porque provocarán un gran empobrecimiento de los más pobres y traerá polarización social" y denunció que la implantación del estado de sitio "sólo busca acallar las voces de protesta por el aumento de precios y la congelación de salarios." La Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGE-PYM) exigió al gobierno establecer enérgicos controles de precios y una efectiva política de generación de empleos.

En el mismo frente de protestas contra la política económica gubernamental, otro eje importante de reivindicaciones se centró en la reforma agraria. El 27 de febrero, el presidente de FINATA, Lic. Raúl García Prieto, inauguró oficialmente la controvertida fase II de la reforma

agraria, al entregar, en parcelas individuales, a sus antiguos arrendatarios, dos propiedades de 14 y 26 manzanas, valoradas en 26,700 y 60,000 colones respectivamente. Al adjudicar las parcelas, el Lic. García Prieto resaltó el carácter "histórico" de dicho acto, aduciendo que con la puesta en marcha de la fase II "se cumple en el estrato campesino salvadoreño la promesa del presidente Cristiani de favorecer a los más pobres de los pobres." Según sus apreciaciones, en adelante el proceso de reforma agraria sería "pacífico, voluntario y en armonía de las dos partes: propietarios y campesinos," ya que en el futuro las tierras adjudicadas no serían producto de la expropiación, sino de su venta voluntaria por parte de sus legítimos propietarios. Las principales federaciones de cooperativas de la reforma agraria, agrupadas en la Asociación Democrática Campesina (ADC) protestaron por los intentos de parcelación de las tierras del sector reformado que hasta entonces habían funcionado bajo el esquema cooperativo; y rechazaron la representatividad del Consejo Consultivo Campesino (CCC), creado por ARENA en sustitución del Consejo de Organizaciones Campesinas (COC).

En el ámbito regional, tras la invasión norteamericana a Panamá, la captura de Noriega y su subsiguiente remisión a los tribunales norteamericanos, la atención de la prensa internacional se concentró en el desarrollo del proceso electoral nicaragüense. Primero fue la fiscalización de la pureza misma del proceso. El 11 de enero, llegó a Managua Elliot Richardson, representante personal del secretario general de la ONU, para entrevistarse con diversos sectores sociales y políticos de Nicaragua —miembros del gobierno y de la oposición, funcionarios del Consejo Supremo Electoral, representantes de la Iglesia Católica, etc. Al concluir su visita, Richardson afirmó haber sacado una "impresión favorable" sobre el desarrollo del proceso electoral, aun cuando detectó "ciertos elementos preocupantes," relativos a la cobertura de la campaña electoral asignada a la oposición en los medios de comunicación, y a la utilización de los recursos del Estado con fines electorales.

El 17 de enero, el secretario general de la

OEA, Joao Baena Soares, presentó al Consejo Permanente de dicho organismo su tercer informe sobre la marcha del proceso electoral. En términos generales, el informe presentaba también una evaluación positiva del proceso. Baena Soares afirmaba que éste "se desarrolla normalmente sin que me parezca estar amenazado en su realización. Esto no significa desconocer que han ocurrido algunos hechos, tales como la violencia, el uso de la televisión y actos de intimidación que han quedado reflejados en el informe."

No obstante, la oposición empezó a denunciar la preparación de un "franco proceso de fraude electoral" por parte del Frente Sandinista. El gobierno norteamericano se hizo eco rápidamente de tales denuncias. El propio presidente Bush afirmó que no tenía "una confianza completa en la transparencia del proceso electoral" y que estaba "preocupado" por los últimos informes que sus asesores le habían presentado. El secretario de Estado, James Baker, advirtió que Estados Unidos no aceptaría el juicio de los observadores internacionales sobre el desenvolvimiento de las elecciones. "A la luz de la experiencia —puntualizó— creo que es necesario que reconozcamos que Estados Unidos necesita hacer sus propios juicios sobre la limpieza y honestidad de las elecciones." En cambio, el ex presidente Jimmy Carter aseguró que no había encontrado pruebas del presunto fraude en preparación. Por su parte, el 4 de febrero, el jefe de la delegación de observadores de la OEA, Mario González, anunció que su equipo implantaría un sistema de tabulación paralela para determinar con precisión lo que pasara en cada lugar y etapa del escrutinio. González manifestó que "conforme a unas condiciones y equipos técnicos muy precisos traídos del exterior, con programas probados en otras elecciones y adaptados a Nicaragua, haremos el seguimiento de todo el proceso de escrutinios."

El 5 de febrero, la misión de observadores de la ONU (ONUVEN) presentó su tercer informe sobre la marcha del proceso. En él recogía la "insistencia por parte de la oposición en la impugnación casi sistemática del poder electoral en Nicaragua," al mismo tiempo que afirmaba que "la actitud de seguir el juego, pero impugnando

plenamente el árbitro, induce a pensar en un esfuerzo de deslegitimación, salvo que se trate de una arriesgada estrategia electoral." A su vez, el representante de la ONU, Elliot Richardson, aseguró que las probabilidades de que los comicios fuesen manipulados habían sido "reducidas al mínimo." Desde agosto del año pasado, aseguró Richardson, 200 observadores de la ONU estaban fiscalizando los preparativos de las elecciones; se estimaba que el día del evento habría unos 3 mil observadores internacionales. "Estas serán las elecciones más observadas de cuantas se han celebrado en un país soberano independiente y las

únicas a las que ha sido invitada una delegación de observadores de la ONU," acotó Richardson.

La mayoría de los observadores y los analistas más prestigiosos del proceso regional apostaban por la reelección de Daniel Ortega. Los sondeos de opinión más serios indicaban su cómoda ventaja. De hecho, tampoco la UNO confiaba demasiado en su propio triunfo, mientras que los contras habían advertido que no depondrían las armas si Daniel Ortega ganaba las elecciones. El triunfo de Violeta de Chamorro fue una sorpresa para todos.

